



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

### AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, diez de mayo de dos mil veintitrés

#### **S19-205**

Proceso: ORDINARIO LABORAL. Apelación sentencia  
Demandantes: **TOMAS MARIO MUNERA GONZALEZ y JULIETA HENAO BOTERO**  
Demandado: **COLMENA SEGUROS S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-010-2017-00169-01  
Tema: Pensión de sobrevivientes  
Decisión: **CONFIRMA PARCIALMENTE**

**LINK:** [19-205 \(010-2017-00169\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLMENA SEGUROS S.A. dentro del proceso de la referencia, además de conocer en el grado jurisdiccional de consulta a favor de uno de los demandantes.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 14** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitan los demandantes que se condene a **COLMENA SEGUROS S.A.** al reconocimiento de pensión de sobrevivientes de forma retroactiva, causada por el fallecimiento de su hijo **JUAN RAFAEL MUNERA HENAO**, junto con las mesadas adicionales e incrementos de ley, desde el 9

de julio de 2015 fecha del deceso, además de los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que el día 9 de julio de 2015 falleció su hijo JUAN RAFAEL MUNERA HENAO por causa de un accidente de trabajo cuando prestaba sus servicios a CORANTIOQUIA, entidad en la que laboraba.
- ✓ Que solicitaron a la ARL COLMENA SEGUROS, entidad en la cual se encontraba afiliado el causante, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, petición resuelta de manera desfavorable el día 21 de octubre de 2015, aduciendo que no cumplían con el requisito de dependencia económica.
- ✓ Que el causante, al momento de su deceso, no tenía esposa ni compañera permanente, tampoco tenía hijos reconocidos o por reconocer, y además convivía con sus padres quienes dependían totalmente de él, ya que era la persona que con sus ingresos mensuales se encargaba de los gastos del hogar. Que además, por su avanzada edad requerían de esa ayuda y medicamentos, con los que contribuía su hijo.
- ✓ Que la entidad accionada no desplegó su capacidad investigativa, dado que NO efectuó visitas domiciliarias, llamadas o entrevistas. La objeción al pedimento fue de plano.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió COLMENA SEGUROS S.A. el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que la mayoría eran ciertos pero que NO le constaba lo pertinente al entorno social, familiar y personal del causante. Niega la dependencia económica aludida por los reclamantes señalando que aquellos tenían fuente de ingresos permanentes ya que el progenitor recibía mesadas pensionales tanto de Colpensiones (por la prestación de vejez) como por parte del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (de naturaleza convencional), y la madre era beneficiaria del cónyuge ante el sistema de seguridad social, aunado a que ambos eran los propietarios del bien inmueble que ocupaban, por los que fueron ellos quienes brindaron morada a su hijo, y en todo caso tenían asegurada su congrua subsistencia. Que desconoce cuáles son las ayudas que requerían los

demandantes, advirtiéndole que el acompañamiento, atención y protección que pudieran necesitar, propios de los sentimientos de solidaridad, afecto y gratitud debido por un hijo a los padres, en forma alguna podía confundirse con dependencia económica. Que sumado a ello la pareja tuvo otras dos hijas que tenían el deber legal de asistir a sus padres.

#### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2019, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a la compañía de SEGUROS DE VIDA COLMENA S. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes únicamente a favor de la señora JULIETA HENAO BOTERO, desde el 9 de julio de 2015, cuantificando un retroactivo que hasta el 31 de mayo de 2019 ascendía a \$157.204.161, autorizando a efectuar los correspondientes descuentos en salud, prestación que a partir del día siguiente continuará reconociendo la entidad en cuantía de \$3.392.042 mensuales, junto con la mesada adicional de diciembre de cada anualidad, que se incrementaría de acuerdo a la ley.

Accedió a la indexación de las condenas, negó los intereses moratorios deprecados y **ABSOLVIÓ** a la ARL de las súplicas impetradas en su contra por el señor Tomas Mario Munera González.

Finalmente condenó en costas a la entidad, fijando como agencias en derecho suma equivalente al 3% del retroactivo pensional.

Dentro del término concedido por la ley, ambas partes interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

### **2. ARGUMENTOS**

#### **2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR**

Comenzó por rememorar los diferentes medios de prueba recaudados, resaltando algunas contradicciones del demandante al absolver interrogatorio de parte, incluso al aceptar que su esposa dependía de él, hecho que lograba también deducirse de gozar de un incremento por persona a cargo, ya que acorde a la norma (art. 21 del Decreto 758 de 1990) era indispensable que el pensionado acreditase la dependencia económica de su cónyuge, pero que *afortunadamente* no reposaba en el plenario copia de la sentencia que evidenciara para el 2015,

que pervivía dicha dependencia e indicara cuáles personas atestiguaron, lo que correspondía *desvirtuar* a la ARL.

En todo caso, en atención al monto de las tres prestaciones que percibía el progenitor del causante para el año 2015 (pensión gracia, de jubilación por educación y de vejez por parte de Colpensiones más el incremento por cónyuge a cargo), las cuales sumaban un total de \$2.425.888, equivalente a 3.76 SMLMV de la época, de ahí que NO era procedente establecer la dependencia económica respecto del causante. Por el contrario, el progenitor era autosuficiente, le alcanzaba para cubrir sus propias obligaciones en materia de alimentación y salud, por lo que el aporte de ese buen hijo no era relevante para su congrua subsistencia.

No obstante, otra cosa sucedía frente a la madre. Señaló que la prueba testimonial evidenciaba la importancia del aporte del causante, reflejado especialmente en los cambios del núcleo familiar luego del deceso del afiliado, concretamente en el acceso a medicina pre-pagada y en la nueva repartición de gastos, aunado a que el causante siempre asumió los gastos de la administración que generaba el apartamento, servicios públicos, transporte o taxis para ir al hospital o en general cualquier desplazamiento de la progenitora, y otros remedios que no asumiera la EPS, siempre estuvo pendiente de estos gastos. Aclaró que el incremento que recibía el actor no era suficiente para cubrir las necesidades de la cónyuge.

Negó los intereses moratorios deprecados al considerar que COLMENA SEGUROS S.A. no incurrió en mora, ni medio una negativa injustificada, obró de buena fe, habiéndose acreditado el derecho de la madre únicamente en el transcurso del proceso.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN**

### **2.2.1. PARTE ACTORA**

Solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios deprecados. Considera que la ARL incurrió en mala fe, aludiendo que, para estas entidades, no eran nuevos este tipo de procesos, y que tanto la jurisprudencia constitucional como la emanada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, había sido reiterativa al hablar de la congrua subsistencia, en especial respecto de personas de la tercera edad. Sostiene que era un *juego* para las entidades negar las pensiones de sobrevivientes, tirando la *moneda al aire*, con el fin de que de pronto en ese espacio de la negativa, los reclamantes desistan, no se asesoren bien, o incluso por su avanzada edad fallezcan, y no

interpongan ningún tipo de acción judicial frente a ellos, para el reconocimiento de una pensión que sería vitalicia, siendo de su interés que no proceda.

Que en tal sentido, no encontraba argumento alguno para cimentar la negativa, menos aún si la entidad se había preparado previamente, realizando una investigación exhaustiva de la que NO era muy difícil evidenciar que el causante ayudaba económicamente a sus padres, como incluso pocos hijos se podrían ver, toda vez que era una persona de una edad un poco avanzada, 49 años y aun convivía con sus padres, circunstancia que NO era usual encontrar, pero la entidad obvió lo evidente, de ahí que al ser conocedoras del contexto de la situación, la entidad NO tenía motivo alguno para negar la prestación. Que la ARL debió, mínimamente, establecer la dependencia parcial de uno de los cónyuges, tal y como lo hizo el despacho, pues contaba con elementos de convicción que automáticamente la obligaban a reconocer la prestación.

En dichos términos insiste en la procedencia de los intereses contemplados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, insistiendo que el proceder o la negativa de la accionada en este proceso, no se ajustaba a los presupuestos de la buena fe, ni la negativa era coherente y contundente, precisamente de acuerdo a los argumentos expresados por el despacho al conceder el derecho, debiéndose recovar la providencia en este punto.

## **2.2.2. RECURSO DE APELACIÓN ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**

Se aparta de las consideraciones del despacho respecto de una eventual dependencia económica de la señora Julieta Henao frente a los ingresos del fallecido Juan Rafael Munera.

Comienza por destacar que la propia demandante en el interrogatorio absuelto, aceptó de manera expresa, que los ingresos provenientes de las pensiones de su esposa estaban dedicadas a los gastos comunes de ese matrimonio, de ahí que resultase equivocado que el juzgado estimara que todos los ingresos del progenitor fuesen *consumidos* por la exigencias económicas de su hijo fallecido, cuando los propios demandantes, y así lo reconocían sus propias hijas, los gastos del hogar eran satisfechos con el dinero proveniente de aquellas pensiones recibidas por el señor Tomas Mario.

De otro lado, afirma que la a quo dio pleno crédito a unas aseguraciones que, en su opinión, carecían de total sustento probatorio, refiriéndose con ello a los gastos de administración que no

fueron cuantificados, y que incluso se desconocían si realmente existían, mucho menos se podía deducir que eran asumidos por el fallecido.

Que igualmente se señalaba que existían unos medicamentos que no eran asumidos por la seguridad social o la EPS a la cual estaban afiliados los demandantes, pero el juzgado asumía, sin ningún fundamento, de que ellos efectivamente se causaron y que eran asumidos por el afiliado fallecido, cuando ningún elemento probatorio, científico o médico permitía establecer de que los demandantes eran atendidos de manera deficiente por el sistema, y que le eran negadas prestaciones o medicamentos. Que salvo los testigos, no existe ningún elemento probatorio que esclareciera cuáles eran esos medicamentos, su frecuencia, valor, por lo que al juzgado no le era dable partir de su existencia y radicar su asunción en cabeza del afiliado.

Que similar situación ocurría frente a los servicios públicos, ya que el juzgado, pese a que conforme la factura allegada este rubro ascendía para la época a \$173.000, presumía que los demandantes NO tenían como asumirlos, y que era un gasto sufragado por el causante.

Inquietud le causa el hecho de no esclarecerse en que se invertía el dinero proveniente de las pensiones del causante, pues se indicaba que estos no salían, no tenían vida social, se mantenían en su residencia, la que incluso posteriormente vendieron por razones distintas a un carácter económico, y únicamente se daba crédito a sus versiones que la totalidad de aquellas pensiones se invertía en alimentación de dos personas de edad, que con todo respeto, resulta inverosímil que se consumieran \$2.000.000 mensualmente.

Que de esta manera, las aseveraciones lanzadas los propios demandantes, e incluso por los testigos, NO podían resultar de recibo, menos aun cuando existían claros elementos que permitían señalar que la demandante sí tenía la dependencia económica, seriamente fincada, a los ingresos de su conyugue, aspecto incluso verificable con su propia versión, aunado a que la demandante era beneficiaria en el sistema de salud del cónyuge pensionado, no así de los reclamantes frente a su hijo.

Destaca que la existencia del incremento pensional concedido al demandante por persona a cargo, permitía concluir, sin lugar a dudas, una dependencia económica exclusiva de la demandante, beneficiada con la sentencia y de los ingresos del pensionado Tomas Mario Munera, sin que a Colmena le correspondiese desvirtuar la supuesta pérdida de esa dependencia económica, por el contrario, correspondía a los accionantes acreditar que aquella dependencia económica documentada, efectivamente en la práctica no se daba.

Que la existencia de un proceso judicial en el que eventualmente se decretó o probó la dependencia económica de la señora Julieta de su esposo Tomas, en ningún momento era un elemento sustancial para determinar que en este proceso tal dependencia no existía, menos aun si se había accedido al reconocimiento de aquella prestación, que debió estar fundado en los elementos de prueba llevados con tal propósito.

Es así como considera que NO existe elemento alguno que permita señalar que la progenitora es beneficiaria en su condición de madre dependiente.

Que además existían inconsistencias e incoherencias que se presentaban en el testimonio de las hijas, de cara a los interrogatorios absueltos, que permitían concluir el yerro en el análisis que hizo el juzgado.

De otro lado, advierte que NO es posible liquidar la pensión con apego a los salarios certificados por el empleador con el cual estaba vinculado laboralmente el causante, pues cualquier cuantificación debía tasarse de acuerdo al IBC reportado a la entidad de seguridad social, presentándose un desfase importante.

Por último, considera que la decisión absolutoria frente a uno de los suplicantes, debe acarrear una condena en costas, pues salió vencido en juicio.

### **2.3. ALEGATOS**

Ninguna de las partes presentó alegatos.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Consiste en determinar si la señora Julieta Henao Botero es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada tras el deceso de su hijo, Juan Rafael Munera Henao, estableciendo si de los diferentes medios de prueba es dable concluir que aquella dependía económicamente del causante. En caso afirmativo se estudiará lo atinente a la cuantía de la prestación, analizándose si la a quo incurrió en alguna falencia en su liquidación.

Igualmente se establecerá si el señor Tomás Mario Munera debe ser condenado en costas y si es procedente ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, conforme lo regulado en el art. 69 del CPT y la SS, respecto del progenitor del causante, se analizará la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta dado que la misma fue totalmente adversas a las pretensiones de aquel y no fue apelada.

#### **4. CONSIDERACIONES**

Para la época del fallecimiento del causante, 9 de julio de 2015, se encontraba vigente la Ley 797 de 2003, que en un principio exigió que la dependencia fuera de forma total y absoluta, expresiones que en el año 2006, mediante sentencia C-111, fueron declaradas inexecutable y que posteriormente dieron lugar a múltiples pronunciamientos por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, oportunidades en las que se precisó que la configuración de la dependencia, ante la ausencia de una definición legal, se debía analizar a la luz de la lógica, lo que presupone simplemente la necesidad de una persona respecto del auxilio de otra, situación que no se desvirtúa por el hecho de que la ayuda al progenitor fuera parcial, pues la exigencia legal no suponía la dependencia absoluta, tornándose admisible que los padres pudieran depender de otros ingresos, pues existían ayudas parciales o complementarias determinantes para la subsistencia de una persona.

Quiere esto decir que NO se precisa un estado de indigencia para que se tenga derecho a la pensión, sobre todo si analizamos el sistema económico colombiano, en donde los ingresos de las clases menos favorecidas son exigüos y las necesidades a cubrir muchas. Por ello, la dependencia económica no pugna con la existencia paralela de otras ayudas, siempre y cuando éstas no conviertan a quien las recibe en autosuficiente, pues en éste caso si desaparecería la dependencia respecto de las demás ayudas.

Recordemos que la finalidad de la pensión de sobrevivientes no es otra que sustituir en parte, los ingresos del causante que eran destinados no sólo para su sostenimiento sino para el de su grupo familiar, el que resulta desprotegido ante su fallecimiento, es decir, suplir la ausencia repentina del apoyo económico para que no se afecten las condiciones mínimas de subsistencia.



En éste punto es importante referenciar lo que en torno al tema del mínimo vital a razonado la Corte Constitucional, que en sentencias como la T-581A/11 ha dicho que tal concepto debe ser evaluado desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, evaluándose las circunstancias de cada caso y haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que la persona tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana.

Bajo este sucinto recuento respecto a la noción de dependencia, descendemos al análisis del caso en concreto.

Nos encontramos ante una progenitores que con ocasión del fallecimiento de su hijo Juan Rafael Munera Henao, quien contaba con 48 años el día que falleció por causas de origen laboral, solicitaron ante la ARL el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que fue negada por la entidad accionada el 21 de julio de 2015, argumentando que *existían evidencias que permitían establecer claramente fuentes de ingresos permanentes y de un inmueble de su propiedad, ingresos por demás suficientes y adicionales a la colaboración económica que le pudiera brindar el causante, y más adelante expresa ustedes cuentan con un conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia.*

Ello da cuenta de que la accionada NO desconoce la existencia de un aporte del causante, pero si descalifica su relevancia con apego a la investigación administrativa, que contrario a lo esbozado en el líbello genitor, sí fue realizada y con antelación a la adopción de tal determinación, para el caso por la firma COINSETEC LTDA (fl. 147 y ss).

La misma está conformada, además de los múltiples formatos diligenciados por los reclamantes, por la información recaudada ante el empleador del causante y en la visita domiciliaria efectuada, en la que además se tomaron las declaraciones de varios testigos.

En su conjunto, de aquellos documentos claramente se establece que:

- ✓ El causante es hijo de los peticionarios, quienes a su vez con cónyuges entre sí.
- ✓ Para el año 2015, el señor Tomás contaba con 81 años y la señora Julieta tenía 76.
- ✓ El deceso ocurrió por causas de origen laboral cuando desapareció en una montaña mientras ejercía su actividad como geólogo y días después fue encontrado sin vida.
- ✓ Para la época de los hechos los demandantes únicamente habitaban con el afiliado fallecido en una casa ubicada en el conjunto residencial *Los Libertadores* que era

propiedad de los reclamantes desde años atrás y sobre la cual NO recaía ningún tipo de gravamen (consúltese el certificado de libertad y tradición allegado).

- ✓ La progenitora era beneficiaria en salud de su cónyuge.
- ✓ Que el causante NO tenía compañera permanente, cónyuge o hijos, y colaboraba con los gastos de sus padres, además era quien estaba pendiente de ellos, los llevaba a citas médicas y reclamaba sus medicamentos.
- ✓ El salario del causante aproximadamente era \$3.700.000 a la data del deceso.
- ✓ El progenitor recibía tres prestaciones económicas: la pensión gracia por valor de \$644.350 para el año 2015; la denominada *jubilación educación* que para esa anualidad era de \$680.642; y por parte de Colpensiones \$1.100.896 más incrementos pensionales de \$90.209. La sumatoria de aquellas asciende a \$2.516.097.

Igualmente se recaudaron las declaraciones de algunos vecinos, María Ruby Mejía de Londoño, José Pablo Arbeláez Restrepo y Oscar Antonio Velásquez Puerta, quienes en forma coincidente explicaron que conocían a aquel núcleo de años atrás, que el causante vivía con sus padres, no tenía hijos y era la mano derecha en el hogar, el apoyo, el soporte, compartía o colaboraba con los gastos familiares.

Ciertamente de ello NO hay duda, el problema gravita en establecer el peso del aporte del hijo que fallece y la relevancia tenía en ese hogar, relevancia que se ve desdibujada NO sólo por el notable valor del ingreso del progenitor, sino además por el desconocimiento de cifras por parte de los declarantes o de algún documento que refleje por lo menos que los gastos de ese hogar eran superiores a los ingresos del padre del causante, y de esta manera avizorar la importancia de la ayuda del hijo fallecido.

Por el contrario, de la prueba en su conjunto, casi es palmaria la autosuficiencia de los reclamantes cuando únicamente sus gastos estaban conformados por alimentación, servicios públicos que para el 2015 ascendía aproximadamente a \$172.000 según factura expedida por EPM (fl.177), predial que es anualizado y la administración cuyo monto se desconoce, pues conforme las máximas de la experiencia y las reglas de la sana lógica, con \$2.516.097 es factible cubrirlos.

Sumado a ello, el incremento pensional reconocido al demandante por tener a su cónyuge a cargo, implica necesariamente la activación del aparato jurisdiccional para acceder al mismo, correspondiéndole a través de un proceso ordinario laboral, acreditar la dependencia económica de su esposa. Y ello fue lo que aconteció pues finalmente la entidad otorgó dicha prebenda

contemplada en el art. 21 del Decreto 758 de 1990, que corresponde a un aumento del 14% del SMLMV.

No obstante, ahora, NO sólo se pretende minimizar el valor de las mesadas percibidas por el señor Tomás Mario Munera, catalogándolas como insuficientes, sin ningún respaldo probatorio, sino además restarle importancia a aquel incremento pensional, mostrando al causante como el mayor proveedor, lo que eventualmente resultaría entendible si las dinámicas familiares de aquel núcleo, en algún momento, en vida del causante, hubiesen variado por determinada circunstancia, pero nada de ello se avizora. Incluso las tres prestaciones que percibe el progenitor fueron otorgadas desde 1995 y 1996 respectivamente.

NO se puede manipular el sistema a conveniencia, mostrándose en un momento como dependiente de un miembro del núcleo, y posteriormente de otro, según se requiera, sólo para obtener un beneficio económico.

Así las cosas, era carga de la prueba de los reclamantes acreditar la dependencia económica, aunque fuese parcial, y no de la ARL como en algún momento extrañamente lo refiere la falladora al señalar que le correspondía a la entidad demostrar que aún pervivía la situación que dio origen a los incrementos pensionales, lo que implícitamente implica que la a quo tenía adherida la idea de que realmente la señora Julieta Henao dependía de su esposo, no así de su hijo.

Innegable resulta que lo que el causante sí les proporcionaba era calidad de vida, calidad que no se palpa en lo económico, sino en su presencia; aquellos padres contaron con la fortuna de vivir con un hijo que les proporcionó cuidados, estaba atento a cubrir todas sus necesidades, llevarlos al médico, realizar las diligencias ante la EPS, encargarse de asumir, a *mutuo proprio*, ciertos gastos para que pudieran disponer libremente de algún porcentaje de las pensiones. Empero, NO significa ello que por ir a pagar la factura del agua, por cancelar el impuesto predial, por caminar hasta un supermercado, el dinero proviniera de sus ingresos como geólogo, y no de la pensión que administraba.

Y es que la prueba testimonial allegada al proceso, lo que sí refleja con claridad, es que el causante era exclusivamente el encargado NO de proveer, sino de administrar económicamente el hogar, pues ni la nieta, Ana Isabel, ni las hijas de los demandantes, Amalia y María Piedad, quienes declararon en este proceso, conocían cuánto gastaban en uno u otro rubro, tampoco los demandantes al absolver interrogatorio de parte, quienes por su avanzada edad ni siquiera son precisos en algunos aspectos, *verbi gratia*, el señor Tomás aduce que su pensión asciende a

\$200.000 y los gastos del hogar \$300.000, buscando una manera de negar su autosuficiencia; por su parte la señora Julieta arguye insistentemente que su hijo pagaba el canon de arrendamiento, pero se queda sin palabras o explicación elocuente cuanto confrontan sus contradicciones dado que la casa era propia, por lo menos para la época de los hechos. Cosa diferentes es que la que tras el deceso del causante vendieron la propiedad, pero NO por cubrir alguna necesidad económica, sino por la tristeza que les embargaba continuar habitando en un lugar lleno de recuerdos, donde ya habían fallecido dos de sus cuatro hijos.

Por su parte Amalia y María Piedad, en versiones que por demás resultan sorprendentemente similares, incluso al utilizar las mismas acepciones, menguan constantemente el valor de la mesada que disfruta su padre, incluso una de ellas refiere que ascendía al mínimo legal cuando realmente abarcaba 3.7 SMLMV del año 2015. Insistentemente dicen que su hermano cubría la droga de sus padres que NO concedía la EPS, no saben cuál, que valor tenía, sólo indican que era para la depresión y la cadera. Igualmente advierte que el causante cubría la pre-pagada, más todo lo atinente al transporte de las citas médicas pues nunca tuvieron vehículo.

Ahora, partiendo de la veracidad de sus palabras, ellas por sí solas no tendrían la vocación de reflejar la relevancia del aporte del hijo, o la inminente necesidad que los progenitores de esa ayuda, menos aun cuando infructuosamente intentan señalar que la pensión del padre, que realmente ascendía a \$2.500.000, únicamente les servía para comer, lo que evidentemente carece de veracidad y se aleja de cualquier realidad.

Pero esas incongruencias realmente son el reflejo del desconocimiento de los manejos administrativos internos del núcleo familiar conformado por su hermano y padres, pues relegaron en el primero toda la labor que ello albergaba, y únicamente vinieron a asumir ese papel tras su deceso, modificándose esos roles primigenios.

Todos los declarantes, con un evidente ánimo de inclinar la balanza en favor de los intereses de la parte actora, magnifican la labor del causante, como si este fuese el único proveedor económico, desconociendo la existencia de las tres pensiones del señor Tomás, a través de la cuales, NO sólo se preveía él, sino además a su cónyuge, circunstancia que, se insiste, fincó la procedencia del incremento pensional reconocido años atrás, sin que válidamente pueda desconocerse esa realidad.

En tal sentido, atendible se torna la decisión absolutoria de la a quo frente a la pensión de sobrevivientes que pretendía el padre del causante, pero reprochables sus argumentos al

concederla a la madre del fallecido, cuando el cubrimiento de los gastos de ambos solicitantes provenía de una misma fuente, disímil al salario percibido por el afiliado. Se insiste, la desmejora en las condiciones de vida no es precisamente por prescindir del apoyo económico del causante, sino por la relevancia de su presencia de cara al cuidado de unos padres de avanzada edad y con un estado de salud deficiente, que antes contaban con un cuidador permanente, que se encargaba de todos los asuntos del hogar, alejándolos de cualquier preocupación.

Quiere esto decir que la madre NO se encontraba atada al aporte del hijo fallecido, en el sentido de que necesitaba su apoyo, auxilio y protección económica, para procurarse una digna subsistencia. Así pues, desafortunadas son las conclusiones a las que arribó la a quo de cara a lo que, con claridad, reflejan los diferentes medios de prueba.

En consecuencia, se revocará la decisión objeto del recurso de alzada en este punto, y en su lugar se absolverá a la ARL del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Julieta. En lo demás se mantendrá incólume.

Bajo las condiciones descritas, NO se torna procedente examinar los restantes descontentos formulados por las partes en el recurso de alzada, entre ellos la viabilidad de los intereses moratorios y la condena en costas, dado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Se condenará en costas en ambas instancias a los demandantes por haber salido vencidos en juicio. En esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de \$50.000 a cargo de cada uno y en favor de la ARL accionada.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

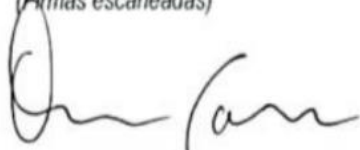
**PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia proferida el 28 de junio de 2019 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido **TOMAS MARIO MUNERA GONZALEZ y JULIETA HENAO BOTERO** identificados con la cédula de ciudadanía Nro. 515.500 y 22.092.208, respectivamente, contra **COLMENA SEGUROS S.A.**, en lo referente a la absolución, conforme las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia.

**SEGUNDO:** se **REVOCA** el fallo en lo demás y en su lugar se **ABSUELVE** a COLMENA SEGUROS S.A. de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra.


**TERCERO:** costas en ambas instancias a cargo de los demandantes. En esta instancia se fija como agencias en derecho la suma de \$50.000 a cargo de cada uno y en favor de la ARL accionada.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.


Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL. Apelación sentencia
Demandantes:	<b>TOMAS MARIO MUNERA GONZALEZ y JULIETA HENAO BOTERO</b>
Demandado:	<b>COLMENA SEGUROS S.A.</b>
Radicado No.:	05001-31-05-010-2017-00169-01
Tema:	Pensión de sobrevivientes
Decisión:	<b>CONFIRMA PARCIALMENTE</b>
Fecha de la sentencia:	<b>10/05/2023</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario